

Educación y democracia

El sistema educativo español ha sufrido dos impactos de manera simultánea: por un lado, la crisis económica, que ha comportado un importante descenso del gasto público, la disminución de recursos de todo género y el estancamiento de la función de ascensor social; y por otro la aplicación de la LOMCE, una ley conservadora, neoliberal y confesional, que incorpora la selección social, la educación diferenciada y el retroceso pedagógico. Ambos factores han paralizado la evolución que se había emprendido, con altibajos, con aciertos y errores, desde la época de la Transición democrática (Pactos de la Moncloa) y los primeros gobiernos socialistas, que siguieron la senda de democratización de la educación para el progreso de nuestra sociedad.

La política educativa retrógrada que incorpora la LOMCE, manipulando la crisis económica para justificar sus disposiciones, ha debilitado al sistema educativo como elemento imprescindible para el fortalecimiento de nuestra democracia, poniendo en cuestión la democracia social, cuyo objetivo es una sociedad más igualitaria, que haga realidad la educación como derecho humano fundamental y servicio público garantizado por el Estado de Bienestar y compensador de desigualdades. También se pone en cuestión la democracia como método de pedagogía activa y participativa; la gestión democrática de la institución escolar; la misión de la escuela como espacio para el desarrollo de la educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos; y, por último, la laicidad de la educación, como atributo de la institución escolar y contenido curricular, y trasunto de la concepción y los valores en los que se basa la democracia misma.

Desde que el socialismo democrático surgió en el siglo XIX, reclamando "cantinas escolares", alfabetización y escuelas elementales para la clase obrera, hasta la recuperación en nuestros días de la senda social que nunca se debió abandonar, la educación ha sido un instrumento privilegiado de política social para redistribuir de manera justa las oportunidades formativas y las rentas, garantizando el acceso de todos a la formación y el conocimiento. En este marco se sitúa la educación como servicio público universal y gratuito y, por lo

tanto, financiado mediante un sistema tributario progresivo, actuando como palanca de nivelación social, compensando las desigualdades de origen.

Para que la educación vuelva a recuperar su función de promoción social que ha perdido con la LOMCE y con los recortes en gasto público educativo, es preciso incrementar el gasto público, facilitando la solución de los más graves problemas de los sectores sociales más amenazados, o excluidos, que han visto debilitadas y/o cerradas sus expectativas escolares de acceso y promoción.

El debilitamiento del sistema educativo está poniendo en cuestión la democracia social, cuyo objetivo es una sociedad más igualitaria, en la que la educación sea un derecho humano fundamental y un servicio público garantizado por el Estado.

El incremento de la pobreza y la precariedad laboral y social ha producido un correlativo crecimiento de la desigualdad de oportunidades de millones de familias y de alumnos. Por ello, las políticas educativas que se precisan han de estar fundamentadas en los datos irrefutables de la realidad social: trece millones de personas excluidas o en riesgo de exclusión social, tres millones de niños en situación de pobreza, un millón de familias sin ingresos, o ingresos muy bajos, un sistema de becas y tasas universitarias que ha perjudicado a 200.000 alumnos desde el curso 2012-2013, una juventud con incierto futuro y, en definitiva, una educación inclusiva impracticable, o difícilmente practicable, como consecuencia de una ordenación arcaica y selectiva de la educación, y de la retracción del gasto público, que es más perjudicial para la escuela pública que para la privada.

Otra dimensión de la relación entre democracia y educación es la que se ve afectada por el incremento

Comprometidos con el progreso de la sociedad

En el Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. En 2016 ayudamos a 1,7 millones de personas a través de nuestros programas sociales.